

LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑA

Carmen Pérez Esparrells

Departamento de Economía y Hacienda Pública

Universidad Autónoma de Madrid

ABSTRACT

Esta comunicación tiene como finalidad analizar la futura integración de los tres subsistemas de la formación profesional en España -formación reglada, formación ocupacional y formación continua- y reflexionar sobre sus efectos, con especial atención al establecimiento del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Del estudio de la integración del sistema de formación profesional se derivan dos conclusiones importantes. En primer lugar, si bien la evolución histórica y el contexto institucional han influido en el entramado de la política formativa, en el futuro, las nuevas ideas sobre los determinantes de la integración de los tres subsistemas serán los hilos conductores más importantes de esta política. La nueva Ley de Formación Profesional y Cualificación que se está desarrollando abre las puertas de esta importante reforma de la política formativa en España.

En segundo lugar, si se concibe al conjunto de la formación profesional como inversión en capital humano y se defiende su total integración con las políticas activas de empleo en clave comunitaria, será necesario, por una parte, gestionar eficientemente los recursos públicos destinados al sistema y, por otra, replantear el esquema de financiación con la introducción de las aportaciones del Estado como una fuente de ingresos adicional en el caso de la formación ocupacional y continua.

Palabras clave: formación profesional, integración, financiación, cualificaciones, competencia.

1. INTRODUCCIÓN

El estudio integrado de los tres subsistemas de la formación profesional en España - formación reglada, formación ocupacional y formación continua- y la transparencia de las cualificaciones se revelan como dos aspectos claves de la puesta en marcha de un verdadero SNCP (en adelante, SNCP) que permita el reconocimiento a una cualificación adecuada para el acceso a una profesión. Precisamente, éste es el objetivo principal del II Programa Nacional de Formación Profesional, la creación de un SNCP, como eje vertebrador de los distintos subsistemas y de los aspectos relacionados con la formación, la cualificación y el empleo.

Esta comunicación¹ tiene como objeto ofrecer una primera reflexión sobre este tema tan de actualidad en la formación profesional de nuestro país, haciéndose especial referencia al SNCP. Para ello, en primer lugar, se realiza un repaso de la normativa más importante que, desde 1980, ha afectado a la integración de los tres subsistemas de formación profesional en España, destacando las actuaciones realizadas en los últimos años para establecer las bases de un sistema integrado de formación profesional. En segundo lugar, se analizan sucintamente los objetivos del II Programa Nacional de Formación Profesional. En tercer lugar, se describe el SNCP y se valora su articulación. Finalmente, se estudia la financiación para atender los objetivos del nuevo Programa Nacional y la distribución de los gastos de formación profesional entre los tres subsistemas.

2. EL MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES

La construcción de un SNCP en nuestro país es todavía un proceso abierto (INCUAL, 2001). La formación profesional en España ha recorrido ya un considerable camino para su total integración, si bien es deseable que, sin mayores dilaciones, se desarrolle un verdadero sistema integrado de formación profesional. En el cuadro 1 se recoge la normativa que, desde 1980, a raíz de la Ley Básica de Empleo, trata algún punto que afecta a la integración de los tres subsistemas.

¹ El material y la información suministrados por el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) han constituido la base imprescindible para la realización de nuestro trabajo. Quiero agradecer expresamente a los técnicos del INCUAL su colaboración.

CUADRO 1. HACIA UN SISTEMA INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

1980	Ley 51/1980 Básica de Empleo
1984	Acuerdo Económico y Social
1985	Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (Primer PLAN FIP, Orden Ministerial 31-7-85)
1986	Creación Consejo General de la Formación Profesional (Ley 1/1986, de 7 de enero) (BOE, 10 de enero de 1986)
1990	Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE) (Ley 1/1990, de 3 de octubre) (BOE, 4 de octubre de 1990)
1993	Directrices sobre los títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas de la FP Reglada (Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo) (BOE, 22 de mayo de 1993) Creación de la Unidad Interministerial de Cualificaciones Profesionales (Consejo de Ministros 18 de febrero de 1994)
1994	Directrices sobre los Certificados de Profesionalidad y contenidos mínimos de la FP Ocupacional (Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo) (BOE, 10 de junio de 1995)
1995	Acuerdo de Bases sobre la Política de Formación Profesional (19 de diciembre de 1996)
1996	II Acuerdo Nacional de Formación Continua (19 de diciembre de 1996) II Acuerdo Tripartito en materia de Formación Continua de los Trabajadores (19 de diciembre de 1996; BOE 1 de febrero de 1997) II Programa Nacional de Formación Profesional (1998-2002) (Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de marzo de 1998)
1998	Creación del INCUAL -Instituto Nacional de las Cualificaciones Profesionales- (Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo) (BOE 16 de marzo de 1999)
1999	

Fuente: Elaboración propia a partir de INCUAL (2001).

Puede afirmarse que la idea de integración del sistema de formación profesional se afianza con el Plan Nacional de Inserción y Formación Profesional (Plan FIP, 1985) y la creación del Consejo General de la Formación Profesional² en 1986, el cual integra a representantes de la Administración, organizaciones empresariales (CEOE y CEPYME) y organizaciones sindicales

² El Consejo General de la Formación Profesional nace como consecuencia también del citado Acuerdo.

(UGT, CCOO, ELA-STV), a los que se añadieron en 1997 los de las Comunidades Autónomas. De este modo, se hizo operativa la colaboración activa de las autoridades laborales y educativas de las Administraciones Autonómicas.

La reforma más importante de la formación profesional reglada fue la de la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE, 1990), que puede ser considerada como el primer antecedente del Sistema Nacional de Cualificaciones. En ella se concibe a la FP como un sistema en el que han de integrarse los diferentes subsistemas -coordinación de las ofertas-. Además, formula un replanteamiento de la formación reglada/inicial con la finalidad de conectarla con la formación ocupacional/continua y, por ende, con el mercado de trabajo, a través del gran avance que supone la estructura modular y el incremento de los niveles de cualificación con respecto al antiguo sistema.

En 1993 el I Programa Nacional de Formación Profesional supone el primer planteamiento global de la formación profesional en España al intentar articular en un todo coherente los dos subsistemas -ocupacional y reglada-. En él se señala que la formación profesional "debe concebirse como única, como un todo, que persigue en cualquier supuesto la preparación adecuada para el ejercicio profesional y, por tanto, la adquisición de competencias con valor y significado en el empleo que facilite la inserción y/o la promoción profesional".

El primer objetivo de este Programa, en relación con la renovación de la oferta, era la "creación de un SNCP a partir de los estudios sectoriales realizados para cada sector productivo". Aun cuando no se alcanzó este objetivo de creación e implantación de un Sistema de Cualificaciones que articulara las ofertas de los subsistemas, se dieron los primeros pasos para la creación de una Unidad Interministerial para las Cualificaciones Profesionales³.

El segundo objetivo del Programa, fue la "elaboración y aprobación de un Catálogo de Títulos Profesionales y de un Repertorio de Certificados de Profesionalidad del INEM", a partir de las previsiones contenidas en la Ley 1/1990, Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), y en la Ley 51/80, Básica de Empleo y sus normas de desarrollo.

El Acuerdo de Bases sobre Políticas de Formación Profesional de 1996 recoge los principios básicos y las líneas generales del II Programa, y es el marco de referencia de la política de formación profesional hasta la entrada en vigor, a principios de 1998, del II Programa Nacional de Formación Profesional, en el que se establecen medidas globales que, sin duda, están marcando una nueva etapa del sistema de formación profesional y los retos del futuro. Además, como se ha señalado, arranca con una importante novedad como era el hecho de que en su elaboración participaron las Comunidades Autónomas, incluidas desde 1997 en Consejo General de la

³ Dicha Unidad estuvo en funcionamiento hasta 1996 y puede ser considerada como el antecedente al INCUAL.

Formación Profesional.

En este nuevo Programa se remarca que la integración de la oferta formativa debe "respetar la pluralidad de tipologías o modelos de centros". Asimismo, continua "la capitalización de la formación adquirida ha de ser compatible con la necesaria diversidad de las formas de acreditación que, en razón de su misma especificidad, existan o puedan desarrollarse en los tres subsistemas de formación profesional".

En 1999, se creó el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) como instrumento técnico, dotado de capacidad e independencia de criterios, para apoyar al Consejo General de Formación Profesional en una serie de objetivos relacionados básicamente con la creación e implantación del SNCP y el seguimiento y evaluación del Programa Nacional de Formación Profesional.

El 19 de diciembre de 2000 se presentaron en el Pleno del Consejo General de Formación Profesional las Bases para la Ley de la Formación Profesional y las Cualificaciones. Asimismo, el 31 de mayo de 2001 se ha aprobado en dicho Pleno el borrador del Anteproyecto de la Ley de Formación Profesional y las Cualificaciones. Con la aprobación de esta última, se trata de elevar a rango de ley lo establecido en el II Programa Nacional de Formación Profesional con la creación del SNCP el cual refleja en un catálogo actualizado y homologado a la UE los patrones de competencias que requiere el mercado de trabajo. Dicho SNCP permitirá la mejor adecuación de las cualificaciones profesionales a las necesidades de producción y a los cambios tecnológicos y sociales, que tendrán un carácter lo suficientemente amplio como para facilitar oportunidades de empleo.

3. EL II PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

El II Programa Nacional considera a la Formación Profesional "como inversión en capital humano". Además, en él se reconoce a la formación profesional como parte esencial de las políticas activas para "así contribuir al empleo estable, a la promoción profesional y social de los docentes y de los destinatarios de la formación y al desarrollo de los recursos humanos en las empresas".

Este nuevo Programa se ha constituido en el instrumento fundamental para propiciar una oferta formativa realmente cualificante, buscando la adecuación de las cualificaciones profesionales facilitadas por cada subsistema de formación con las competencias que, en cada momento, demande el sistema productivo. Se asienta en los siguientes pilares (INCUAL, 2001):

- * La consideración de la formación profesional como inversión en capital humano.

- * La integración de la formación profesional con las políticas activas de empleo en clave comunitaria.
- * La participación de la Administración General del Estado, de los agentes sociales y de las Comunidades Autónomas, dentro del Consejo General de Formación Profesional.
- * La creación del SNCP. Puesta en marcha del Instituto Nacional de las Cualificaciones.

Su contenido se estructura alrededor de seis objetivos básicos -referidos al conjunto del Sistema Nacional de Formación Profesional-, sin perjuicio del mantenimiento de unos objetivos específicos para cada uno de los tres subsistemas de formación. Sus objetivos básicos se concretan en los siguientes:

- * Objetivo primero: Creación del SNCP con participación de las Comunidades Autónomas.
- * Objetivo segundo: Profesionalizar para la inserción a través de las empresas.
- * Objetivo tercero: Desarrollar un sistema integrado de formación e inserción profesional.
- * Objetivo cuarto: Garantizar la calidad de la formación profesional, su evaluación y seguimiento.
- * Objetivo quinto: Marco y Dimensión Europea de la formación profesional.
- * Objetivo sexto: Programar la oferta a grupos con necesidades específicas.

El II Programa Nacional recoge los objetivos y medidas de actuación que, coordinadamente, deben desarrollar las Administraciones con competencias en la materia. Todos ellos se articularán a través del Sistema Nacional de las Cualificaciones Profesionales, considerado en dicho Programa como el principal instrumento para "conseguir el tratamiento global, coordinado, coherente y óptimo de los problemas de cualificación y formación profesional de los diversos colectivos de personas, de las organizaciones y de las empresas".

4. EL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES

El SNCP va a suponer, a nuestro modo de ver, una auténtica revolución de la formación profesional en España. Consiste en "el diseño de un Sistema integrado de cualificación y formación profesional", con el que se quiere "instrumentar un sistema capaz de conseguir el tratamiento global, coordinado y óptimo de los problemas de cualificación y formación profesional de los diversos colectivos de personas, de las organizaciones y de las empresas".

El objetivo fundamental del SNCP consiste en dar respuesta a la necesidad de establecer los niveles de extensión y características de la competencia profesional que debe ser alcanzada en los campos de la actividad productiva, de forma que se consiga: (i) la mejora de las

cualificaciones de la población adulta y juvenil; (ii) la mejora de la transparencia del mercado de trabajo y del ajuste de la oferta y la demanda de empleo; y (iii) el incremento de la calidad y coherencia del sistema de formación profesional.

Para afrontar estos tres retos, el SNCP debe proporcionar respuestas adecuadas para: (i) el desarrollo de la integración de las cualificaciones profesionales -referente común de competencias-; (ii) la integración de las diversas formas de adquisición de las competencias profesionales; y (iii) la "coherencia" de la oferta formativa de la formación profesional a través de las necesidades de cualificación de los distintos colectivos. Esta tercera dimensión se traducirá en dos elementos claves del sistema: (a) un catálogo integrado modular de formación asociado al sistema de cualificaciones; y (b) una red de centros formativos "integrados" que oferten ese catálogo, organizado en paquetes modulares.

La integración total traerá consigo la creación de un sistema fiable entre las partes y la evaluación de los contenidos con métodos análogos. Para ello, será necesario desarrollar un Catálogo de Cualificaciones Profesionales, un Catálogo Integrado Modular y Red de Centros y un sistema de evaluación y certificación de la competencia.

La implantación del mismo implicará un aumento de la calidad de la formación profesional por la vía de la normalización de la competencia común. Bajo este modelo, la formación no es el fin que hay que conseguir, sino un instrumento para conseguir la competencia⁴ apropiada para la producción y el empleo.

Además, el Sistema Nacional, tal cual lo señala el II Programa Nacional, se apoya en la idea establecida en la Unión Europea de aprendizaje durante toda la vida. Evidentemente, las líneas básicas de este marco son convergentes con los grandes planteamientos de la Unión Europea⁵: (i) romper los obstáculos al aprendizaje a lo largo de toda la vida, ofreciendo oportunidades a las personas según sus capacidades y posibilidades y motivando a las personas para el aprendizaje y la adquisición de competencias; y (ii) fomentar la posibilidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida como señala la Carta Europea de competencias básicas.

Por último, señalar que, esta pauta de comportamiento tendrá su reflejo en el gasto en formación profesional, debido al previsible aumento de demanda de este tipo de estudios en el mercado español. Este fuerte aumento vendrá provocado simultáneamente en los tres subsistemas.

⁴ Las finalidades de este Sistema Nacional y los requisitos establecidos configuran un modelo de sistema basado en la competencia. Los estándares de competencia son los resultados esperados en situaciones de trabajo con independencia del lugar en que este se desarrolle.

⁵ "Memorandum sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida" (2001) publicado por el MECD cuyos mensajes son: 1º Nuevas cualificaciones para todos; 2º más inversión en recursos humanos; 3º la innovación de la enseñanza y el aprendizaje; 4º valorar el aprendizaje; 5º redefinir la orientación y el asesoramiento; 6º acercar el aprendizaje al hogar.

Será necesario gestionar con eficacia los recursos económicos de los que se dispone, aumentar el nivel de calidad y rendimiento y conseguir una "profesionalización" para la inserción laboral a través de las empresas -desarrollo integrado de Cualificación Profesional y Formación-.

5. ALGUNAS CIFRAS SOBRE LA FINANCIACIÓN Y EL GASTO PÚBLICO EN FORMACIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑA

5.1 El gasto público en el conjunto de la formación profesional

El gasto público en formación profesional en los años 1997 y 1998 que se refleja en el cuadro 4 incluye los totales de todos los capítulos de gasto, siempre referidos a los créditos presupuestarios inicialmente aprobados.

Tras el análisis de estos cuadros se pueden destacar las siguientes conclusiones. Primera, la evolución del gasto público en formación profesional de los tres subsistemas en el período 1993-1996 queda reflejada en la situación "latente" en 1997: un predominio de los recursos empleados en la formación profesional del sistema educativo (aproximadamente un 40% del gasto total en formación profesional) y dentro de la formación profesional de la Administración Laboral, un mayor peso del gasto en formación ocupacional 33.6% frente al 27% en formación continua, derivado del progresivo reparto de las cuotas de FP de la Seguridad Social durante este período.

CUADRO 4. GASTOS/INVERSION EN FORMACION PROFESIONAL

(En millones de pts.)

Subsistemas	1997	1998	1997 (%)	1998 (%)	Crec. (%)
F. Reglada	219.594	236.295	39.4	37.8	7.6
F. Ocupacional	186.889	199.438	33.6	31.9	6.7
F. Continua	150.365	189.335	27.0	30.3	25.9
Total sistema	556.848	625.068	100	100	7.6

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo General de Formación Profesional (1998).

Segunda, la situación de 1998 evidencia dos grandes tendencias: por una parte, un reparto igualitario de los fondos entre los tres subsistemas, especialmente la formación ocupacional y continua (31.9% y 30.3%, respectivamente) y, por otra, un crecimiento acelerado de los fondos

públicos gestionados por el FORCEM (25.9%). No obstante, según "el libro 2000 de la Formación" de las Cámaras de Comercio, se estima que los recursos destinados a la formación ocupacional van a experimentar un crecimiento superior al 60%.

CUADRO 5. PARTICIPANTES EN ACCIONES FORMATIVAS

(Nº de participantes)

Subsistemas	Alumnos	Promedio horas	Ppto. ejec. 1998
F. reglada/inicial	444.827	1.800	236.295
F. ocupacional	519.929	400	124.761
F. continua (*)	2.180.860	40	105.809
. FORCEM	1.503.050	40	90.000
Total	3.145.616		466.865

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de acción para el empleo del Reino de España-1999.

Nota: (*) Cifra aproximada teniendo en cuenta tanto los alumnos como el gasto realizado por HOBETUZ y por el INAP.

Si se relacionan las cifras de gasto público en los distintos subsistemas con las de beneficiarios de los mismos es preciso calcular el ratio promedio-hora, ya que existen grandes diferencias en horas lectivas por curso entre los tres niveles. A partir de la información contenida en el cuadro 5 se pone de manifiesto que existen aún actualmente amplias diferencias de coste por alumno/hora entre los subsistemas. En el caso de la formación profesional reglada, el gasto medio en 1998 es de alrededor de 295 pts. alumno por hora.

En el caso de la formación profesional ocupacional, el mayor gasto alumno/hora en términos comparativos del gasto público en el anterior subsistema viene explicado, en parte, por el mayor coste de las enseñanzas prácticas a través de los Centros Colaboradores, las organizaciones empresariales o sindicales y las Entidades públicas o privadas de formación o las empresas que hayan suscrito convenios de colaboración. El gasto medio por beneficiarios/hora de la formación ocupacional asciende aproximadamente a 600 pts. alumno por hora en 1998.

A pesar del crecimiento que ha experimentado el gasto en formación profesional continua y el importante aumento del número de participantes en los cursos promovidos por el FORCEM, HOBETUZ y el INAP se sigue manteniendo el gasto medio en este tipo de formación como el más alto de los tres subsistemas: 1.212.9 pts. por participante/hora en 1998.

5.2. La financiación de la formación profesional en el sistema educativo

La asignación de competencias en educación no universitaria a todas las Comunidades Autónomas, recientemente completada, varía el panorama de la financiación de este nivel educativo. Con anterioridad a las transferencias, la Administración Central financiaba el gasto - que aparecía en los PGE- y el responsable de las transferencias era el Estado o algunos de sus Organismos Autónomos Administrativos, como la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. Además, el sistema de becas estaba totalmente centralizado.

En la actualidad, la mayor parte del gasto público en esta competencia se realiza por las Administraciones Autonómicas. La educación, al igual que el resto de competencias transferidas - con excepción de la sanidad- se financian con cargo a la Participación en los Ingresos del Estado y son los propios Gobiernos autonómicos los que deciden las transferencias corrientes y de capital de sus presupuestos hacia los programas de formación profesional de su respectiva Comunidad Autónoma.

5.3. La financiación de la formación profesional en la Administración Laboral

La financiación de la formación profesional de los desempleados y de los ocupados se realiza en una parte importante a través de la cuota de formación profesional que se obtiene del sistema de Seguridad Social de los trabajadores en general. El porcentaje de la cuota de FP⁶ se sitúa en el 0.70% sobre la base reguladora de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales - 0.60% aportado por las empresas y 0.10% aportado por los trabajadores-. Desde 1997 y hasta la actualidad, tras el III Acuerdo Tripartito sobre Formación Continua, el porcentaje se sigue repartiendo de forma igualitaria, el 35% de la cuota de FP para cada uno de los dos subsistemas.

Tradicionalmente, se pueden considerar dos fuentes de ingresos en la formación ocupacional: la cuota de FP, (que en 1996 representaba aproximadamente el 70% del gasto en este subsistema, según datos del CEDEFOP), y la ayuda del Fondo Social Europeo, (que suponía el otro 30% restante del gasto). Esta financiación se encargan de gestionarla el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través del INEM y las CC.AA. a través de sus respectivas Consejería de Trabajo, Empleo y/o Economía y Hacienda.

La formación continua se financia a través de las siguientes fuentes públicas y privadas de financiación: la cuota de FP, (que en 1996 representaba aproximadamente el 69% del gasto en

⁶ Con la firma en 1993 de los Acuerdos sobre Formación Continua y la creación de la FORCEM, se acordó que un porcentaje de esta cuota de FP, -que anteriormente era íntegramente para la formación profesional ocupacional-, se destinará a la financiación del Acuerdo Nacional. Dicho porcentaje se fijó en el 0.10% en 1993, para incrementarse de forma paulatina durante los años de vigencia del Acuerdo: 0.20% en 1994, 0.25% en 1995 y 0.30% en 1996. También se estableció que si se aumentaba la cotización, su importe se destinaría de forma íntegra a la formación continua.

este subsistema, según datos del CEDEFOP), la ayuda del Fondo Social Europeo, (cofinanciación con fondos estructurales, que suponía el otro 26%) y otra financiación privada, (que cubre el 5% restante del gasto).

En resumen, la financiación pública del gasto en formación profesional siempre ha discurrido por dos caminos bien delimitados. Por un lado, la financiación de la formación profesional en el sistema educativo que, tradicionalmente, ha estado ligada a los ingresos del Estado, como una de las grandes políticas financiadas con cargo a los PGE. Por otro, la financiación de la formación profesional en la Administración laboral que ha recaído principalmente sobre las cotizaciones sociales. Siempre se ha entendido que la formación profesional ligada al sistema productivo era una prestación social contributiva, y como tal se debía financiar con cargo a las cotizaciones sociales. Algunos autores han propuesto destinar todos los recursos procedentes de las cuotas de formación profesional a la financiación de la formación continua -sólo de los trabajadores-. Sin embargo, el que, históricamente, se haya financiado la formación ocupacional con estos recursos se apoya en el criterio de solidaridad entre los que tienen trabajo y los que no lo tienen.

Hasta fechas muy recientes, con la nítida división que existía en nuestro país entre formación profesional del sistema educativo y de la Administración laboral tenía sentido la separación de los recursos financieros obtenidos de las distintas fuentes. En un futuro próximo, con la fuerte vinculación de los tres subsistemas parece razonable que la distribución y finalidad del gasto en la política formativa pueda condicionar su financiación. El actual esquema de financiación podría llegar a generar una disfunción importante para la integración de los tres niveles, ya que los efectos demográficos sobre la población trabajadora -y que cotiza- pueden dejarse sentir en los dos subsistemas de formación ocupacional y continua.

Con la integración de los tres subsistemas aparecerá un nuevo concepto de política formativa y una posible solución, en nuestra opinión, pasaría por financiar los dos niveles de formación ocupacional y continua de la siguiente forma: el cuarenta por ciento a través de aportaciones del Estado y el sesenta por ciento restante con cargo a cotizaciones sociales. Evidentemente, los porcentajes de participación de cada fuente son una decisión política. Lo que se quiere poner de manifiesto en este artículo es la conveniencia de financiar vía aportaciones del Estado una política activa de empleo como es la formación profesional.

Además, con la entrada en vigor del SNCP existirá una fuerte vinculación entre los tres subsistemas, con lo cual no va a tener demasiado sentido que sigan manteniéndose diferentes formas de financiación. Como se verá, los "centros integrados" van a recibir alumnos procedentes de diferentes subsistemas y, por tanto, podrán recibir financiación procedente de distintas fuentes.

Además, es previsible que a partir de 2006 se extingan los fondos para la formación profesional que tienen su origen común en el Fondo Social Europeo.

Con independencia de estos cambios en las fuentes de financiación pública, también parece deseable potenciar la financiación privada. En efecto, la optimización de la forma de subvencionar los costes de la formación profesional no sólo tiene que pasar por un aumento de la financiación pública -subvenciones del Estado- sino también por un incremento de la financiación de origen privado: por un lado, las empresas, que participen no sólo grandes empresas sino también PYMES; y, por otro, los usuarios del servicio, que participen a través de una tasa que recoja una parte del coste, por ejemplo, de la acreditación de los títulos o certificados.

Toda la argumentación anterior se basa en que el gasto público en formación profesional genera, por una parte, unos efectos externos positivos a la sociedad muy importantes no sólo como herramienta de lucha contra el desempleo sino como elemento dinamizador de la competitividad y, por extensión de la economía, adaptándose los perfiles profesionales a los cambios tecnológicos y a los nuevos entornos socio-políticos y como elemento favorecedor de la movilidad de los trabajadores en el nuevo escenario laboral europeo. Por otra parte, produce un beneficio individual a los ciudadanos que la reciben ya que éstos capitalizan la formación que reciben con mayores posibilidades de empleo estable y de calidad y con derechos en el mercado de trabajo.

6. CONSIDERACIONES FINALES

Parece claro que impulsar la integración de la formación profesional es uno de los grandes retos que se están afrontando en esta nueva etapa de reforma. En nuestra opinión, a corto plazo, se deben alcanzar tres objetivos prioritarios tras la implantación del SNCP:

- * Aumentar la calidad, la coherencia y el prestigio del sistema de formación profesional.
- * Fomentar la total incardinación de los tres subsistemas a través de la articulación de un SNCP integrado en el espacio europeo.
- * Implantar un sistema de reconocimiento, evaluación y certificación de la competencia adquirida.

Para conseguir estos objetivos serán necesarios, a nuestro modo de ver, algunos cambios significativos en el sistema de formación profesional:

- * Aprobación de una Norma Básica reguladora del SNCP, cuyas bases fueron presentadas en el pleno del Consejo General el 19 de diciembre de 2000.

- * Profundización en la puesta en marcha de indicadores de resultados tales como: incidencia de la formación en el empleo, movilidad de ocupados, coste por alumnos en todos los subsistemas, etc.
- * Racionalización de los recursos destinados a la Formación Profesional en todos sus niveles y replanteamiento del sistema de financiación de la Formación Ocupacional y Continua.

7. BIBLIOGRAFÍA

CACHÓN, L., MONTALVO, M.D. et al (1999): Educación y formación a las puertas del siglo XXI. Ed. Complutense.

CÁMARAS DE COMERCIO (2000): El libro 2000 de la Formación. Ed. Civitas.

CRUZ CASTRO, L. (2000): "Ideas, instituciones y ciclo económico: las políticas de formación en España". Unidad de Políticas Comparadas (CSIC), documento de trabajo 00-06.

CEDEFOP (1999): El sistema de Formación Profesional en España. Estudios Institucionales (ESIN).

CONSEJO GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL: Programa Nacional de Formación Profesional (1993). Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

CONSEJO GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL: Nuevo Programa Nacional de Formación Profesional (1998). Secretaría General del Consejo de Formación Profesional. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

ECONOMISTAS: Revista del Colegio de Economistas de Madrid nº 71, "La Formación Continua 1996"

FORMACIÓN CONTINUA EN EUROPA (FORCE): "La Formación Profesional Continua en España" (1994) (varios autores). Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

FUNDACIÓN DE CAJAS CONFEDERADAS (FUNCAS): "Cuadernos de Información Económica", nº 155, marzo-abril (2000).

FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN CONTINUA (FORCEM): Memoria de Actividades (varios años).

FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN CONTINUA (FORCEM): Gestión bipartita de la formación continua (1999). Oficina Internacional del Trabajo (CINTERFOR).

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO: Guía Legal de la Formación Continua (1998).

INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: Guía de la Formación Profesional en España (2001).

INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: Los Consejos y programas de formación profesional en la España de las Autonomías (2001).

INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES (2001): "Integración del sistema de formación profesional y transparencia de las cualificaciones", ponencia presentada en Sevilla el día 16 de marzo de 2001 (mimeografiado).

IRDAC- Comité Asesor de I+D de la Comisión Europea- (1994): Quality and Relevance, Bruselas. Vers. castellano en el Consejo Superior de Cámaras con el título Calidad e Innovación. Optimizar el capital humano de Europa, reto de los sistemas de Educación y Formación, Madrid.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: Memorándum sobre el aprendizaje permanente (2001). Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos sociales (1998).

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: Perspectivas del empleo (varios años). Informes OCDE.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: Guía Laboral 1990 (cerrada 10 de septiembre de 1990).

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: Guía Laboral 2000 y de Asuntos Sociales (actualizada a 15 de mayo de 2000).

REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: "Serie Economía y Sociología", nº 1 (1997).

REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: "Serie Economía y Sociología", nº 21 (1998).

SAEZ, F. (coord.) (2000): Formación y empleo. Fundación Argentaria. Ed. Visor.

TORRE PRADOS, I. (2000): "La dimensión social del capital humano. Formación Ocupacional y Formación Continua", Papeles de Economía Española, nº 86.